



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

XDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 VIGO

SENTENCIA: 00051/2018

Modelo: N11600

C/ LALIN N° 4, PISO 5° EDIFICIO N°2

Equipo/usuario: MG

N.I.G: 36057 45 3 2017 0000723

Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000377 /2017 /

Sobre: ADMON. LOCAL

De D/Dª: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Abogado: LETRADO AYUNTAMIENTO

Contra: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO DE VIGO

Abogado: LETRADO AYUNTAMIENTO

Procurador D. JESUS ANTONIO GONZALEZ-PUELLES CASAL

SENTENCIA nº 51/18

Vigo, a 2 de abril de 2018

Vistos por mí, D. ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo, los presentes autos de recurso contencioso-administrativo, seguidos ante este Juzgado bajo el número 377 del año 2017, a instancia de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL como **parte recurrente**, representada y defendida por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, frente al CONCELLO DE VIGO como **parte recurrida**, representada por el Procurador D. Jesús González-Puelles Casal y defendida por la Letrada de sus Servicios Jurídicos Dña. Carmen Pazos Area, contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo de Vigo de 31/07/2017 por la que se desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta por la TGSS contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto el 21/06/2016 contra la diligencia de embargo de cuentas en relación con el IBI de los ejercicios 2012, 2103 y 2014, por importe de 266.007,99 euros de importe principal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El Letrado de la Administración de la Seguridad Social actuando en nombre y representación de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) mediante escrito presentado el 2 de noviembre de 2017 interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo de Vigo de 31/07/2017 por la que se desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta por la TGSS contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto el 21/06/2016 contra la diligencia de embargo de cuentas en relación con el IBI de los ejercicios 2012, 2103 y 2014, por importe de 266.007,99 euros de importe principal.



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

Mediante decreto se acordó admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo, reclamar el expediente administrativo, emplazar a la Administración demandada y requerirla para que notifique la resolución por la que se ordena la remisión del expediente a todos los interesados, emplazándoles para que puedan comparecer ante este Juzgado en el término de nueve días.

SEGUNDO: Recibido el expediente administrativo se puso de manifiesto el mismo en Secretaría a la parte recurrente para que formulara su demanda dentro del plazo legal, lo que así hizo.

Presentado el escrito de demanda y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho correspondientes, termina solicitando que se dicte sentencia por la que, estimando la demanda, se acuerde la nulidad del embargo practicado por el Concello de Vigo, con imposición de costas a la demandada.

TERCERO: Dado traslado del escrito de demanda a la Administración demandada para que lo contestara, presentó escrito de contestación a la demanda, en el que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho correspondientes, termina solicitando que se dicte sentencia por la que se desestime el recurso.

CUARTO: Por Decreto de 29 de enero de 2017 se acordó fijar la cuantía del recurso en 266.007,99 euros. Recibido el pleito a prueba, limitada a la documental, con el resultado que es de ver en autos, y evacuado el trámite de conclusiones, se declararon los autos conclusos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Sobre el objeto del recurso y las alegaciones de la demandante y del Concello demandado.

La TGSS interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo de Vigo de 31/07/2017 por la que se desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta por la TGSS contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto el 21/06/2016 contra la diligencia de embargo de cuentas en relación con el IBI de los ejercicios 2012, 2103 y 2014, por importe de 266.007,99 euros de importe principal.

La TGSS solicita la anulación del embargo alegando que los bienes que forman parte del patrimonio de la Seguridad Social son inembargables, tal y como expresamente establecen los artículos 108 y concordantes de la vigente LGSS.

El Concello de Vigo, después de exponer los antecedentes relativos a las liquidaciones tributarias y las providencias de apremio, correctamente notificadas, así como el requerimiento de designación de bienes y derechos, expone que se notificó la diligencia de embargo el 04/05/2016, tras efectuarse la traba en fecha 07/04/2016 del saldo depositado en la cuenta bancaria de la Administración deudora, en la cuantía de 348.727,15 euros.



Interpuesto recurso de reposición, fue desestimado expresamente mediante Resolución de 12/05/2016, notificada el 03/06/2016. La reclamación económico-administrativa fue desestimada por acuerdo del TEA de 31/07/2017.

El Concello de Vigo considera que no es admisible la interpretación postulada por la TGSS, que conduciría a la inembargabilidad absoluta de todos los bienes de la TGSS, lo que los excluiría de embargo en caso de impago por parte de dicha Administración. En la práctica significaría una habilitación para no hacer frente a sus obligaciones o una “amnistía fiscal a favor de la TGSS” porque no podría embargarse, en contra del artículo 31 de la Constitución española.

Por el contrario, el Concello de Vigo sostiene que la TGSS puede actuar realizando actos “iure imperio” y actos “iure gestionis”, y solo en el primer caso goza del privilegio de la inembargabilidad de sus bienes y derechos. La normativa reguladora del patrimonio de la Seguridad Social debe ser integrada con el resto de la normativa del patrimonio del Estado en virtud del artículo 103.2 del TRLGSS. Al no hacer ninguna referencia el TRLGSS al dinero/saldos, hay que acudir al artículo 3 de la LPAP 33/2003, de 3 de noviembre, que excluye del concepto “patrimonio” el dinero, los valores, créditos y demás recursos financieros. Además invoca la aplicación del artículo 30 de la LPAP.

SEGUNDO: Sobre la normativa aplicable.

El artículo 108 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de enero, (en adelante, TRLGSS) establece que *“los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Seguridad Social son inembargables. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos del patrimonio de la Seguridad Social, ni contra sus rentas, frutos o productos del mismo, siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto sobre esta materia en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.”*

Para determinar los bienes y derechos que integran el “patrimonio de la Seguridad Social” utilizado debe acudirse, antes que al artículo 3 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas 33/2003, de 3 de noviembre, al artículo 103 del TRLGSS, que establece que *“Las cuotas, bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otro género de la Seguridad Social constituyen un patrimonio único afecto a sus fines, distinto del patrimonio del Estado.”*

Sobre la preferencia regulativa del TRLGSS sobre la LPAP 33/2003 en lo que concierne al patrimonio de la TGSS, además del genérico principio de especialidad utilizable en los supuestos de concurrencia normativa, debe atenderse al propio artículo 103.2 del TRLGSS, que establece el marco de regulación al que se debe atender en los siguientes términos:

“La regulación del patrimonio de la Seguridad Social se regirá por las disposiciones específicas contenidas en la presente ley, en sus normas de aplicación y desarrollo y, en lo no previsto en las mismas, por lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Las referencias que en dicha ley se efectúan a las Delegaciones de Economía y Hacienda, a la Dirección General del Patrimonio del Estado y al Ministerio de Hacienda se entenderán hechas, respectivamente, a las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.”



El artículo 104.1 del TRLGSS, después de establecer que la titularidad del patrimonio único de la Seguridad Social corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, insiste en el marco regulativo al que ha de atenderse con preferencia, al prever que “dicha titularidad, así como la adscripción, administración y custodia del referido patrimonio, se regirá por lo establecido en esta ley y demás disposiciones reglamentarias.”

Por tanto, la aplicación de la LPAP 33/2003 se debe realizar a título meramente supletorio de lo no regulado por el TRLGSS y demás normas aplicación y desarrollo del mismo. A idéntica conclusión se llega si se atiende a la Disposición Adicional 3ª de la LPAP 33/2003, que dispone que el Patrimonio de la Seguridad Social se regirá por su legislación específica, siendo de aplicación supletoria lo establecido en esa ley básica.

TERCERO: Sobre la aplicación al caso de la normativa aplicable.

De lo expuesto en los preceptos precedentes se desprende que el saldo de la cuenta bancaria de la titularidad de la TGSS forma parte del patrimonio único de la Seguridad Social, al ser de aplicación preferente la definición del artículo 103 del TRLGSS, que comprende “Las cuotas, bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otro género de la Seguridad Social”, más amplia que el más restringido concepto de “patrimonio de las Administraciones Públicas” objeto de la definición del artículo 3 de la LPAP, el cual sí excluye el dinero, los valores, créditos y demás recursos financieros de la hacienda de las Administraciones Públicas.

Partiendo de la premisa anterior, debe advertirse que es el legislador el que de forma expresa ha decidido la inembargabilidad de los saldos de las cuentas bancarias de la Seguridad Social, al asociar a la totalidad de los bienes y derechos que integran el patrimonio único de la Seguridad Social, sin excepción, la nota de inembargabilidad.

No es posible, en el marco de esta específica regulación normativa, que incluye todas las cuotas, bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otro género de la Seguridad Social en un patrimonio único inembargable, distinguir como hace el Concello de Vigo, a los efectos de la embargabilidad, entre bienes patrimoniales y demaniales, distinción que se recoge en el artículo 30 de la normativa básica contenida en la LPAP 33/2003, que excluye del privilegio de la inembargabilidad a determinados bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas. Como tampoco es posible, por la razón expuesta, excluir al saldo de la cuenta bancaria titularidad de la TGSS del concepto de patrimonio único de la Seguridad Social.

La preferencia aplicativa del TRLGSS bastaría para considerar inembargable la cuenta bancaria de la TGSS. Pero sigue siendo necesario dar respuesta a los alegatos del Concello de Vigo y eludir los obstáculos que podrían aducirse a esa aplicación desde la perspectiva del artículo 24.1 de la Constitución, en cuanto podría suponer consagrar una interpretación que condujera a la



imposibilidad absoluta de ejecución de una Administración Pública, contraria a los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

En este sentido, hay que resaltar que tampoco la normativa básica circunscribe de forma exclusiva a los bienes demaniales el privilegio de la inembargabilidad, sino que el citado artículo 30 de la LPAP 33/2003 lo extiende a los bienes patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. Esta misma extensión de la inembargabilidad se contempla para los bienes patrimoniales del sector público estatal en el artículo 23.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Por otra parte, tampoco cabe obviar que los bienes demaniales, inembargables conforme al artículo 6 y 30.1 de la LPAP 33/2003, son aquellos que siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.

La afectación determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público (artículo 65 de la LPAP 33/2003), y no solo puede derivar de un acto expreso, sino que existen formas de afectación tácita o presunta, así como afectaciones por disposición de la ley.

Aplicando las anteriores consideraciones al presente supuesto, debe advertirse que en este caso existe una afectación legal del patrimonio único de la Seguridad Social a los fines propios de ésta (artículo 103 del TRLGSS), esto es, a la acción del Estado por la que se “garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en esta ley” (artículo 2.2 del TRLGSS).

En consecuencia, es razonable concluir que ha sido el legislador el que ha declarado afecto todo el patrimonio de la Seguridad Social al cumplimiento de fines propios de un servicio público o una función pública. Y por ello no hay verdadera vulneración del artículo 30 de la LPAP 33/2003 ni de la doctrina fijada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 166/1998 –que declaró inconstitucional la inembargabilidad de los bienes patrimoniales de la Administración no afectos a un uso o servicio público-, ya que existe una afectación legal, que comprende la cuenta bancaria de la TGSS objeto de embargo, a un servicio público, lo que sitúa a dicha cuenta bancaria en la órbita, cuando menos, de los bienes patrimoniales materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, si no se quiere entender que la afectación legal es expresiva de su inclusión en el dominio público.





Ese carácter legal de la afectación releva de la necesidad de prueba específica de la vinculación de los fondos de dicha cuenta bancaria con un servicio público, porque legalmente se declara todo el patrimonio de la Seguridad Social, en su conjunto, afectado a esos fines de servicio público, lo cual justifica su inembargabilidad. Ello no impide la validez y ejecutividad de las liquidaciones tributarias que se pueden girar a la TGSS, ni la validez y ejecutividad de las providencias de apremio. Simplemente introduce una limitación en los medios de ejecución forzosa, al no poder acudir al embargo de bienes del patrimonio de la Seguridad Social, pero no excluye que la deuda tributaria apremiada pueda satisfacerse a través de otros mecanismos, como por ejemplo la compensación de deudas.

A esta misma conclusión llega la **Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha de 2.11.2015, N° de Recurso: 88/2014, N° de Resolución: 298/2015**, que concluye que *“el patrimonio de la Tesorería General de la Seguridad Social, patrimonio único afecto a sus fines como veíamos en el art. 80 LGSS, tiene que gozar (y todo él) del privilegio de la inembargabilidad, sin duda por su carácter universalmente prestacional y porque legalmente, esto es, por normas con rango de ley, está afecto a un fin eminentemente público. Aunque, por ende, a los fondos bancarios ahora analizados no les alcanzara el concepto de dominio público, sí que serían bienes patrimoniales afectos a un fin público y a un servicio público, con lo que igualmente quedarían exceptuados de embargo. Pueden ser objeto de apremio, sin duda, mas no de embargo ni de ejecución posterior. Lo dicho con anterioridad, obviamente, no implica obstáculo alguno a que el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Tesorería General de la Seguridad Social puedan acudir al mecanismo de compensación de deudas en la forma en la que legalmente proceda.*

Que la Ley General Presupuestaria, pues, excluya de la inembargabilidad a los bienes patrimoniales no afectos a fines o servicios públicos, no es óbice para cuanto venimos exponiendo, porque aquí estaríamos en presencia, precisamente, de bienes que sí estarían afectos.”

En atención a lo expuesto, procede anular los actos recurridos, y por ende, la diligencia de embargo de cuentas objeto de impugnación.

CUARTO: Sobre las costas procesales.

No se aprecia la existencia de circunstancias que justifiquen una condena en costas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA, en atención a la existencia de serias dudas de derecho, derivadas de la naturaleza de las cuestiones objeto de controversia, que ofrecen un cierto margen de apreciación respecto a la aplicación de determinados conceptos jurídicos utilizados en la normativa legal.



FALLO

Que debo **ESTIMAR Y ESTIMO** el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo de Vigo de 31/07/2017 por la que se desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta por la TGSS contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto el 21/06/2016 contra la diligencia de embargo de cuentas en relación con el IBI de los ejercicios 2012, 2103 y 2014, por importe de 266.007,99 euros de importe principal, y **ANULO** los actos recurridos, dejando sin efecto la diligencia de embargo de cuentas bancarias de la TGSS.

No se hace expresa condena respecto de las costas causadas en este juicio.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de apelación, que deberá presentarse en este Juzgado en el plazo de quince días contados desde el siguiente a su notificación y del que conocerá la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Para la interposición de dicho recurso de apelación será precisa la consignación como depósito de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander con el número 3308.0000.85.0377.17.

Está exenta de constituir el depósito referido la Administración pública con arreglo al art. 1.19ª de la Ley Orgánica 1/2009.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos principales, lo acuerda, manda y firma D. ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. Doy fe.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Magistrado- Juez que la suscribe estando celebrando audiencia pública en el día de hoy que es el de su fecha, doy fe.

